

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3772-2020
CARATULADO : SANHUEZA/FISCO DE CHILE

Santiago, quince de Noviembre de dos mil veintidós

VISTO.

A folio 1 y rectificación a folio 13, comparece la abogada Paz Becerra Urzúa, domiciliada en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins N° 252, oficina 42, comuna de Santiago, en representación de Eliana María Covarrubias Vidal, pensionada, domiciliada en pasaje Topos N°2152, Arica, Región de Arica y Parinacota; Raúl Enrique Herrera Varas, domiciliado calle Las Paredes, parcela 34, comuna de San Rafael, Séptima Región; Claudio Antonio Quinteros Tamayo, pensionado, domiciliado en calle Los Raulíes 81, Villa El Maitén, Machalí, Sexta Región; Adolfo Héctor Quinteros Tamayo, domiciliado en calle Gabriela Mistral N°999, Villa Arcoíris, Machalí, Sexta Región; y, Elías Esteban Sanhueza Catalán, pensionado, domiciliado en pasaje los silos nueve mil veintiséis, comuna de Pudahuel, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilios en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Expone los acontecimientos experimentados por cada uno de sus representados como sigue:

Eliana María Covarrubias Vidal, trabajadora de la empresa textil estatizada "Bamvarte", fue detenida por militares y llevada al Regimiento de Rancagua, el día 2 de enero de 1974. Al día siguiente fue llevada a la cárcel pública de Rancagua para ser procesada por la Ley de Seguridad al Interior del Estado N° 12.927, donde estuvo detenida hasta el 18 de abril, es decir, 3 meses y 17 días.

Señala que en febrero se percató que había quedado embarazada producto de las violaciones de los militares, lo cual le destruyó la vida emocional y psicológicamente; su hijo se llamaba Claudio Berenguela Covarrubias y murió en 1977, en extrañas condiciones, atropellado, también fue muy irregular la entrega del cuerpo, no me dejaron investigar, nada, todo bajo un secretismo absoluto. Él también fue reconocido por la Comisión Valech II, como víctima del actuar de agentes del Estado, con el número 1085.

Agrega que, estando en la cárcel fue víctima de múltiples torturas, y fue reconocida por el Estado de Chile como víctima afectada por violaciones a los derechos humanos, individualizada en la "*Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas*", elaborado por la Comisión de Prisión, Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, con el número 6672.

Raúl Enrique Herrera Varas fue detenido por Carabineros junto a sus padres el 20 septiembre de 1973, tenía 8 años, lo tuvieron un día completo en la comisaría, y a sus padres los mantuvieron encerrados durante cuatro días.



Foja: 1

Narra que esto ocurrió en el sector Camarico ubicado en la Séptima Región, en esos días se tuvo que quedar a cargo de sus tres hermanos, el menor tenía meses de edad. Además, fue reconocido por el Estado de Chile como víctima por violaciones a los derechos humanos, individualizado en la “*Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas 2*”, de la Comisión de Prisión, Política y Tortura, conocida como Listado Valech II, con el número 4081.

Claudio Antonio Quinteros Tamayo y Adolfo Héctor Quinteros Tamayo, fueron detenidos por la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y Carabineros, el 1 de abril de 1980 cuando participaban en una compañía de teatro a nivel nacional, quedando detenidos unos 20 días en la cárcel de Rancagua.

Sostienen que les dieron la libertad y tenían que firmar ante el Fiscalía Militar, cada dos semanas durante 3 o 4 años. Luego, en 1984, los tomaron nuevamente detenidos y estuvieron relegados durante 3 meses. Agregan que fueron reconocidos por el Estado de Chile como víctimas afectadas por violaciones a los derechos humanos, en la “*Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas 1*”, de la Comisión de Prisión, Política y Tortura, conocida como Listado Valech I, con los números 19762 y 19761 respectivamente.

Elías Esteban Sanhueza Catalán, fue detenido en 1982 a sus 19 años, en Joaquín Pérez con Neptuno, pasando por varias comisarías durante dos semanas y siendo víctima de múltiples torturas. Fue reconocido por el Estado de Chile como víctima por violaciones a los derechos humanos, individualizado en la “*Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas 1*”, de la Comisión de Prisión, Política y Tortura, conocida como Listado Valech I, con el número 22637.

Expone que producto de las torturas sufridas, daños físicos y psicológicos, y angustias experimentadas, todos sus representados padecen de profundas afectaciones físicas, psicológicas y emocionales que hasta el día de hoy perduran.

Argumenta que los autores de estos acontecimientos a los cuales ha hecho alusión previamente, son agentes del Estado, que formaban parte del Ejército de Chile, Carabineros de Chile y Policías de Investigaciones, que organizados, desarrollaron una política criminal al amparo de un régimen político dictatorial, cuyo origen ilegítimo se produce en el contexto de un golpe de estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973, configurándose así, crímenes de lesa humanidad y que en razón de esos sucesos, que constituyen los hechos fundantes de su pretensión, es que interponen la presente acción de indemnización de daños y perjuicios en contra del Estado de Chile, a objeto de que indemnice a su representado, y se repare, en parte, el daño que se le ha causado.

Cita profusa jurisprudencia y también doctrina, abordando temáticas respecto a la obligación de reparar, el derecho de reparación de las víctimas, la responsabilidad del Estado, daño sufrido como crimen de lesa humanidad, y la imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida, destacando que debe ponderarse el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito de los derechos humanos a la luz de las normas de carácter público e internacionales, y no bajo las normas del derecho privado, tornándose así en imprescriptibles las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Termina solicitando que se condene al demandado al pago de \$150.000.000, para cada uno de los demandantes anteriormente individualizados, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el tribunal estime conforme al mérito de autos, para cada uno de los demandantes anteriormente individualizados; con costas.



«RIT»

Foja: 1

A folio 15 se practicó la notificación personal de la demanda y su proveído.

A folio 17 el demandado contestó el libelo pretensor, solicitado el rechazo de éste en todas sus partes o, en subsidio, que se rebajen sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, la que funda en que el demandante ya ha sido suficientemente indemnizado con motivo de los hechos por él invocados, mediante transferencias directas de dinero (pensión anual establecida por la Ley 19.992), asignaciones de derechos sobre prestaciones estatales específicas (gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda) y otras reparaciones de tipo simbólico (construcción de memoriales y del Museo de la Memoria, y establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Premio Nacional de los Derechos Humanos).

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios deducida, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo, a su juicio, rechazarse la demanda en todas sus partes.

Indica que tomando en consideración la época de los hechos descritos por el actor, y aun entendiendo suspendida la prescripción durante todo el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, el 22 de mayo de 2020, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio de lo anterior, para el evento de estimarse no aplicable la norma citada, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos del artículo 2515 en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, por cuanto desde la fecha en que pudo ser exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda, también habría transcurrido el plazo antes mencionado.

Arguye que la indemnización de perjuicios, cualquiera que sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, siendo su contenido netamente patrimonial, de lo cual derivaría que la acción destinada a exigirla, como toda acción de esta índole, esté expuesta a extinguirse por prescripción, ya que a su respecto se aplican las normas del Código Civil, lo que no sería contrario a la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, por pertenecer al ámbito patrimonial.

Alega que no existiendo norma expresa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, sería menester entonces aplicar las normas de los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, los que establecen las reglas sobre la prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Cita también profusa jurisprudencia que haría suya las argumentaciones enunciadas a propósito de la excepción de prescripción.

En tercer lugar, y en subsidio de las defensas anteriores, manifiesta que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XQXGXCSLCZG

Foja: 1

hacerlo más soportable mediante una cantidad de dinero u otro medio, sin que esto devengue en una fuente de lucro o ganancia, estimando que la cifra pretendida por el actor es absolutamente excesiva, teniendo presente las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia.

Además, en subsidio, sostiene que cualquier indemnización que pudiera concederse en virtud de la sentencia que dirima esta controversia, debiera considerar los montos ya recibidos por el actor por parte del Estado, pues, de lo contrario, aquel recibiría un doble pago, ya que todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Por último, asevera que los reajustes e intereses que solicita la parte demandante no proceden tratándose de una obligación dineraria que solo podría establecerse con motivo de la sentencia que resuelva la presente Litis, y además, desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

A folio 21 la parte demandante evacuó el trámite de réplica, manifestando que el Fisco conforme el mérito de su contestación, no ha controvertido la condición de víctima de doña Eliana María Covarrubias Vidal, don Raúl Enrique Herrera Varas, don Claudio Antonio Quinteros Tamayo, don Adolfo Héctor Quinteros Tamayo y don Elías Esteban Sanhueza Catalán ni la exposición de hechos contenidos en la demanda, que dan cuenta del secuestro, prisión política y torturas otros crímenes sufridos por ellos, como tampoco su calidad de víctima calificada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, ni la existencia del daño ocasionado.

En primer lugar, respecto a la excepción de reparación integral o satisfactiva, señala que no comparte dicho planteamiento, toda vez que, el principio general es la reparación integral del daño de acuerdo a lo expuesto en la demanda; y, que las pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por agentes del Estado entre los años 1973 y 1990, en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por las víctimas.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, aclara que el estatuto legal aplicable al caso concreto, sobre la base de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por nuestro país en los términos del artículo 5 inciso 2º de la carta fundamental, y de las normas vigentes no puede ser simplemente aquel aplicable a los negocios y relaciones jurídicas entre particulares, y establecido por las reglas de la prescripción extintiva del Código Civil.

Concluye que en cuanto al monto de lo demandado, la normativa vigente les exige presentar peticiones concretas, y que sin perjuicio de ello, y entendiendo que no hay dinero que supla el dolor experimentado por las víctimas, ha solicitado en subsidio -en la parte petitoria- que se condene a la suma que el tribunal determine. Agrega, sobre la procedencia del cobro de reajustes que, es el juez de instancia quien determina la cuantía de las reparaciones, por lo que, procede que éstas sean reajustadas desde la dictación del fallo de primera instancia, puesto que, este es el momento procesal en que queda fijado el monto de reparación. La reajustabilidad, por otro lado, está ligada a la garantía de la reparación integral o plena, y del pago efectivo de las obligaciones y la desvalorización monetaria es algo que afecta a cualquier tipo de indemnización, por lo cual, es necesario acudir a un índice de reajustabilidad como es el Índice de Precios del Consumidor.

A folio 25 el demandado evacuó la dúplica, en la que ahonda en las argumentaciones ya vertidas en la contestación.



«RIT»

Foja: 1

A folio 27, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta hubo de recaer.

A folio 46 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Eliana María Covarrubias Vidal, Raúl Enrique Herrera Varas, Claudio Antonio Quinteros Tamayo, Adolfo Héctor Quinteros Tamayo, y Elías Esteban Sanhueza Catalán, demandaron en juicio ordinario de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio Poduje, a objeto de que el ente fiscal sea condenado a pagar en favor de cada uno de ellos la suma de \$ 150.000.000, o la suma que el tribunal determine, más reajustes, intereses y costas, a título de indemnización por el daño moral que se le infligió con ocasión de la privación de libertad y torturas de las que fue víctima a manos de agentes del Estado.

SEGUNDO: Que, legalmente emplazado, el demandado opuso primeramente la excepción de reparación satisfactiva, por ya haber recibido el demandante diversos beneficios asistenciales por parte del Estado. Asimismo, opuso la excepción de prescripción extintiva conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Por último, en subsidio de lo anterior, alega lo desproporcionado que resulta la suma pretendida por el actor, la improcedencia de que se le indemnice nuevamente a raíz de los mismos hechos y la impertinencia de aplicar intereses y reajustes sobre una eventual indemnización que se declare en la sentencia que dirima la controversia.

TERCERO: Que en el trámite de la réplica, la apoderada de los actores, buscó refutar las defensas opuestas por el demandado, manifestando que las actuales pensiones de sobrevivencia en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por las víctimas; que las reglas en torno a la prescripción civil no operan tratándose de atentados de lesa humanidad, y que el monto solicitado, es plenamente procedente.

CUARTO: Que en el trámite de la dúplica el demandado profundizó las argumentaciones ya vertidas en la contestación.

QUINTO: Que, para la prueba de sus asertos, la parte demandante acompañó, legalmente y sin objeción de contrario, los siguientes documentos:

1. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Eliana María Covarrubias Vidal, cédula de identidad N°6.416.101-6, de 37 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

2. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Raúl Enrique Quinteros Tamayo, cédula de identidad N°10.325.362-4, de 24 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

3. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Claudio Antonio Quinteros Tamayo, cédula de identidad N°7.860.904-4, de 17 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

4. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Adolfo Héctor Quintero Tamayo, cédula de identidad N°6.014.887-2, de 18 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XQXGXCSLCZG

«RIT»

Foja: 1

5. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Elías Esteban Sanhueza Catalán, cédula de identidad N°9.878.931-6, de 10 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

6. Informe Pericial Psicológico de Evaluación de Daño Asociado a Violencia Política en Dictadura, emitido con fecha 15 de abril de 2022, por el Psicólogo Cristian Mauricio Vilches Guerra, quien examina a don Raúl Enrique Quinteros Tamayo, cédula de identidad N°10.325.362-4.

7. Informe Clínico de Evaluación de Daño Asociado a Violaciones de Derechos Humanos emitido por el equipo del Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS), del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, quienes examinan a don Elías Esteban Sanhueza Catalán, cédula de identidad N°9.878.931-6.

8. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 11 de abril de 2022, en el que se certifica que don Elías Esteban Sanhueza Catalán, cédula de identidad N°9.878.931-6, se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y torturados, confeccionado por la Comisión Valech I, individualizado en el N° 26637.

9. Certificado N° 075, sobre informe Psicológico emitido el 13 de mayo de 2020, por el equipo profesional del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) del Servicio de Salud de Arica, doña Jeannette Valenzuela, Psicóloga y Viviana Abarca, coordinadora, quienes examinan a doña Eliana María Covarrubias Vidal, cédula de identidad N°6.416.101-6.

10. Informe médico Psicológico de Evaluación de Daño emitido en el mes de junio de 2021, por el equipo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) del Servicio de Salud de la Región Bernardo O'Higgins, doña Maritza Rizzo, Psicóloga, y don Rodolfo Briones, médico, quienes examinaron a don Claudio Antonio Quintero Tamayo, cédula de identidad N°6.860.904-4.

11. Informe médico Psicológico de Evaluación de Daño emitido en el mes de Junio de 2021, por el equipo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) del Servicio de Salud de la Región Bernardo O'Higgins, doña Maritza Rizzo, Psicóloga, y don Rodolfo Briones, médico, quienes examinaron a don Adolfo Héctor Quintero Tamayo, cédula de identidad N°6.014.887-2.

12. Informe Psicológico de don RAÚL ENRIQUE HERRERA VARAS, emitido por el profesional CRISTIAN MAURICIO VILCHES GUERRA, Psicólogo y Licenciado en Psicología - Universidad Católica del Norte (UCN) Postítulo Psicología Clínica del Trauma y Psicoanálisis Relacional (ILAS) Diplomado en Evaluación Psicológica Forense UCN Registrado en Colegio de Psicólogos de Chile N° 5.901, Perito Psicológico Forense Particular.

13. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech, por don Raúl Enrique Herrera Varas, cédula de identidad N° 10.325.362-4, de 24 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

SEXTO: Que, a folio 28 se agregó a los autos el Oficio ORD DSGT N° 4792-436, evacuado con fecha 5 de febrero de 2021 por Marcelo Sandoval Araya, Jefe del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social y dirigido al Cuarto Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se informa sobre los beneficios de reparación Leyes N°s 19.992 y 20.874, recibidos por Eliana María Covarrubias Vidal, Raúl Enrique Herrera Varas, Claudio Antonio Quinteros Tamayo, Adolfo Héctor Quinteros Tamayo, y Elías Esteban Sanhueza Catalán.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XQXGXCSLCZG

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de no haber sido controvertido, del mérito de las probanzas descritas, resulta plenamente acreditada la circunstancia de haber sido los demandantes víctimas de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973.

OCTAVO: Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley 20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

NOVENO: Que los vejámenes de los que fue víctima el demandante de autos han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4); que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7); que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17); que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (artículo 32); que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63); que la parte del fallo que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).

DÉCIMO: Que, asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).



Foja: 1

UNDÉCIMO: Que, en el marco del reconocimiento de la violación de derechos humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, se dictó en el año 1992 la Ley 19.123, mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

A su vez, la Ley 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "*Listado de prisioneros políticos y torturados*", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma que alcanza entre \$ 1.353.798 y \$ 1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

De igual manera, la Ley 20.874 concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo las condiciones que señala, y que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

DUODÉCIMO: Que las leyes precedentemente señaladas, denominadas "*leyes de reparación*", si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los derechos humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil de terror, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renunciias permitidas y equiparidad de beneficios que involucran; sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional, pero no incompatible, como se dijo, con la misma.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

De acuerdo con lo razonado, procederá el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

DÉCIMO TERCERO: Que, en segundo lugar, el demandado opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

Sobre lo anterior cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales



derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

DÉCIMO CUARTO: Que la disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

DÉCIMO QUINTO: Que la prescripción extintiva de la acción deducida no puede por tanto decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del *ius cogens* o reglas imperativas de derecho internacional.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, no existe norma internacional, como tal, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, sino que también repararlos en su integridad.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de esta manera, la acción resarcitoria de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de los mismos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto. Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.

DÉCIMO OCTAVO: Que en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, habrá de decirse que, en la especie y como ya se ha dicho, se ha acreditado suficientemente que el demandante fue víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es bastante para haber generado en aquél secuelas como las descritas en el libelo, y también por los informes acompañados, suponiendo todo esto una inconmensurable aflicción tanto espiritual como física experimentada por el actor, difícilmente superable por el mero transcurso del tiempo, y que es consecuencial a un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.

DÉCIMO NOVENO: Que el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandando, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos, en cuanto resulta evidente que éste se produjo al verse el actor



Foja: 1

privado arbitrariamente de su libertad personal y luego sometido a diversas modalidades de tortura. De esta manera, las conductas materializadas por agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por el demandante, encontrándose el primero en definitiva, obligado a indemnizar al segundo.

VIGÉSIMO: Que, en relación con el quantum indemnizatorio, cabe tener presente que, mediante oficio remitido a este tribunal por el Instituto de Previsión Social, se acreditó que los actores han sido beneficiarios de pensiones pecuniarias por parte del Estado, en virtud de las denominadas “*leyes de reparación*”, para: Eliana María Covarrubias Vidal por un total de \$30.930.445; Raúl Enrique Herrera Varas, \$19.481.339; Claudio Antonio Quinteros Tamayo, \$30.930.445; Adolfo Héctor Quinteros Tamayo \$30.930.445; y, Elías Esteban Sanhueza Catalán \$30.930.445.

Debido a ello, y teniendo presente lo ya consignado en el considerando duodécimo, la suma que con motivo de esta sentencia se concederá a los demandantes Eliana María Covarrubias Vidal, Claudio Antonio Quinteros Tamayo, Adolfo Héctor Quinteros Tamayo y Elías Esteban Sanhueza Catalán a título de daño moral se fijará en la suma de \$50.000.000 para cada uno de ellos; y \$20.000.000 para Raúl Enrique Herrera Varas.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en materia de reajustes, como no habrá de concederse una indemnización por daño emergente o lucro cesante, ni tampoco por el total de lo pretendido a título de reparación de daño moral, ninguna importancia o utilidad revisten estos accesorios para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda vez que éste va considerado en el monto que es actualmente fijado para avaluar la indemnización prudencialmente determinada.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en lo que concierne a los intereses reclamados, es preciso señalar que si bien es efectivo que la cuantía de la obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva cuando su objeto es resarcir el daño extrapatrimonial, es cierto también que la decisión contenida en la misma sentencia se propone dirimir el conflicto en forma definitiva e impone una condena pura y simple a pagar esta suma de dinero con fines reparatorios, sin perjuicio de que existan recursos posibles en su contra. Así, entonces, la obligación adquiere un objeto determinado por el fallo de la instancia y, por tanto, se hace susceptible de un cumplimiento espontáneo por el deudor a contar del instante en que la sentencia surte sus efectos, es decir, desde su notificación legal. En este sentido, la meramente hipotética disconformidad de la parte vencida con el fallo y el ejercicio eventual de medios recursivos en su contra, no enerva la aptitud del fallo para disponer actualmente la condena del deudor, fijando con certeza inmediata el monto de la indemnización (aunque, en su caso, supeditado a la “*confirmación*” del tribunal superior) y, por tanto, es, a contar de ese momento, que debe considerarse la mora del deudor para los efectos de devengar el capital adeudado los intereses legales.

Por lo demás, una interpretación en contrario conduce a que en el tiempo intermedio entre la notificación de la sentencia definitiva y su adquisición de un carácter firme, el capital asentado en el fallo permanecerá invariable, sin reajustes ni intereses, vulnerándose el indiscutido principio del valorismo en las obligaciones dinerarias, y el de la reparación integral del daño, toda vez que los perjuicios ocasionados, además, con el retardo en el pago de una suma de dinero (que es lo que previene el artículo 1559 del Código Civil) quedarán sin resarcir.

Por estos motivos, se accederá a la condena al pago de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.



«RIT»

Foja: 1

VIGÉSIMO TERCERO: Que las restantes probanzas singularizadas y no analizadas en forma pormenorizada, en nada altera lo que se ha venido razonando.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; 1 y 2 de la Ley N° 19.123; 1 y 2 de la Ley N° 19.992; 1 de la Ley N° 20.874; 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 346 N° 1, 356, 384 N° 2, 399, 402, 426, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **SE DECLARA:**

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de contestación.

II.- Que se acoge, parcialmente, la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos, a folio 1, sólo en cuanto se condena al demandado Fisco de Chile, al pago por concepto de daño moral, en favor de los demandantes: Eliana María Covarrubias Vidal, Claudio Antonio Quinteros Tamayo, Adolfo Héctor Quinteros Tamayo y Elías Esteban Sanhueza Catalán, de la suma de \$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno de ellos; y \$20.000.000 (veinte millones de pesos) en favor de Raúl Enrique Herrera Varas, por igual concepto.

III.- Que la suma decretada precedentemente deberá ser pagada con intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados a contar de la época de notificación de la presente sentencia a la parte demandada y hasta la época de pago efectivo.

IV.- Que cada parte asumirá sus costas.

Regístrese y notifíquese.

Pronunciada por Luis Eduardo Quezada Fonseca, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, quince de Noviembre de dos mil veintidós.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XQXGXCSLCZG